

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido a bien conceder la libertad condicional a los siguientes penados:

Del Hospital Penitenciario de Madrid: José Joaquín Barrena Menacho.

De la Prisión Provincial de Hombres de Barcelona: Hans Werner Schulz, José Enrique Gea, Antonio Leal Bordera, Joaquín Tornero Motos, José Marín Castillo.

De la Prisión Provincial de Ciudad Real: Gumersindo Fernández Daponte.

De la Prisión Provincial de Córdoba: Julio Santos Gómez.

De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: José Luis González Herrero, Santiago Doroteo Ambite Brihuega.

De la Prisión Provincial de Teruel: Manuel Tey Garrucho.

De la Prisión Provincial de Hombres de Valencia: José Sala Sanchis.

De la Colonia Agrícola Penitenciaria de Herrera de La Mancha (Ciudad Real): Pedro Cabrera Hidalgo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 27 de mayo de 1966.

ORIOI

Ilmo. Sr. Director general de Prisiones.

\*

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplicación del beneficio de libertad condicional establecido en los artículos 98 al 100 del vigente Código Penal y Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956; a propuesta del Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de las Penas por el Trabajo, y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido a bien conceder la libertad condicional a los siguientes penados:

De la Colonia Penitenciaria de El Dueso-Santofía (Santader): José María Moreno López.

Del Hospital Penitenciario de Madrid: Manuel Pérez Gómez.

De la Prisión Provincial de Almería: Manuel Castillo Cazorla.

De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: Roberto Nombela Gómez.

De la Prisión Provincial de Zamora: Víctor Jaime Rodríguez.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 27 de mayo de 1966.

ORIOI

Ilmo. Sr. Director general de Prisiones.

\*

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplicación del beneficio de libertad condicional establecido en los artículos 98 al 100 del vigente Código Penal y Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956; a propuesta del Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de las Penas por el Trabajo, y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido a bien conceder la libertad condicional a los siguientes penados:

De la Prisión Central de Burgos: Miguel Dura Gómez y Andrés Ruiz Bendito.

Del Hospital Penitenciario de Madrid: Manuel Ventaja Caravaca.

De la Prisión Provincial de La Coruña: Daniel Brage López.

De la Prisión Provincial de Huesca: Isidra Emilia Gómez Manrique.

De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: Gabriel Chavarri Orive y José Arnal Abadía.

De la Prisión Provincial de Murcia: Joaquín Pérez Cascales.

De la Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Francisco Javier Monleón Acero y José García Medina.

De la Prisión Provincial de Hombres de Valencia: Indalecio Esteban Gómez.

Del Destacamento Penal de Mirasierra (Madrid): José Ortega Almagro.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 27 de mayo de 1966.

ORIOI

Ilmo. Sr. Director general de Prisiones.

*ORDEN de 21 de julio de 1966 por la que se acuerda la supresión del Juzgado de Paz de Fadón y su incorporación al Comarcal de Bermillo de Sayago (Zamora).*

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión del Juzgado de Paz de Fadón, como consecuencia de la incorporación del respectivo municipio al de Bermillo de Sayago (Zamora),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de Paz de Fadón y su incorporación al Comarcal de Bermillo de Sayago, el que se hará cargo de su documentación y archivo.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 21 de julio de 1966.—P. D., Alfredo López.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

*RESOLUCION de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por los hermanos García Rodríguez contra calificación del Registrador mercantil de Cáceres.*

Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por los hermanos García Rodríguez contra la negativa de V. S. a inscribir una escritura de revocación de poder;

Resultando que por la escritura de 3 de enero de 1938 se constituyó en Cáceres la Sociedad «Sobrinos de Gabino Díez, Sociedad Limitada», cuya escritura de adaptación a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se otorgó el 24 de septiembre de 1957 por doña Carmen Rodríguez Ramírez y doña Pilar González Mediavilla, únicos socios entonces de la Empresa, por fallecimiento de sus esposos, los fundadores; que en esta escritura se contenían entre otras las siguientes estipulaciones:

«V. La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento de uno de los socios, pero en tal caso, los herederos del socio fallecido, que tendrán los mismos derechos que su causante, habrán de estar representados en la Sociedad por una sola persona, cualquiera que sea la distribución que entre ellos hagan de su participación en la Sociedad, asumiendo, por tanto, dicho representante todo el interés social del socio fallecido.

VI. Doña Carmen Rodríguez Ramírez y doña Pilar González Mediavilla tendrán el carácter de socios gestores y a ambos corresponde solidariamente la dirección y administración de los negocios sociales, uso de la firma social y representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, pudiendo, por tanto, celebrar toda clase de contratos en que haya de intervenir la Sociedad, incluso aceptar bienes inmuebles en pago de deudas a favor de aquella y garantías personales pignoraticias e hipotecarias, pudiendo a su vez cancelar unas y otras y enajenar las fincas adquiridas con tal objeto, cobrar y retirar cuantas cantidades se libren a favor de la Sociedad o que por cualquier concepto haya aquella de recibir y disponer de los fondos sociales, expidiendo los talones y cheques y documentos precisos; aceptar y endosar letras de cambio y pagarés a la orden; gestionar los asuntos de la Sociedad ante toda clase de tribunales, entidades, organismos y funcionarios y autoridades de la Administración central, provincial, municipal y sindical, pudiendo otorgar poderes a Procuradores para que sigan los autos por sus trámites e instancias hasta su conclusión, quedando en general facultados solidariamente dichos Gerentes para realizar cuanto sea preciso para la mejor organización y marcha de los negocios, pues las facultades que se han enumerado no suponen limitación a ellas exclusivamente. Será, no obstante, necesario el acuerdo de ambos socios gestores para resolver sobre los extremos siguientes:

- A. Aprobación del balance anual.
- B. Aumento o disminución del capital social.
- C. Ampliación del negocio a otras operaciones de comercio.
- D. Admisión de nuevos socios.
- E. Cesión, enajenación total o parcial de los negocios de la Sociedad, tomar dinero a préstamo y garantizar deudas.
- F. Cantidades que cada socio pueda retirar a cuenta de beneficios.
- G. Aumento o disminución de la asignación en concepto de Gestor.
- H. Nombramiento y separación y retribución de Administradores apoderados.
- I. Resoluciones de cuestiones no previstas en este contrato.

Para tomar acuerdos en Junta cualesquiera de los socios citará al otro con veinticuatro horas de anticipación, al menos, si se encuentran ambos en la ciudad de Cáceres y de diez días si alguno de ellos se encontrare ausente. La citación señalará hora y sitio de la Junta, así como el orden de asuntos a tratar. En lo no expresamente previsto se ajustará a las disposiciones legales.

Que doña Carmen Rodríguez Ramírez falleció el 15 de enero de 1958, y en cumplimiento de lo establecido en la transcrita cláusula V. sus hijos y herederos, los señores García Rodríguez, hoy recurrentes, otorgaron escrituras de designación de representante de la Sociedad a favor de su hermano don Dámaso García Rodríguez, que a petición de éste fueron inscritas en el Registro Mercantil; que también se formalizó la escritura de participación y adjudicación a sus hijos y herederos de las participaciones que en la Sociedad «Sobrinos de Gabino

Díez» tenía doña Carmen Rodríguez Ramírez, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil; que convocada la Junta general de la Sociedad, prevista en el último párrafo de la estipulación VI de la escritura de adaptación, tuvo lugar en la fecha, hora y lugar señaladas, sin que a la misma asistiera el otro socio, doña Pilar González Mediavilla; que los restantes socios, hijos de la ya fallecida doña Carmen, a los que correspondía el 75 por 100 del capital social, acordaron por unanimidad revocar el poder que la Sociedad tenía conferido a don Rufino Sánchez Polo; que en cumplimiento del anterior acuerdo, don Dámaso García Rodríguez otorgó la correspondiente escritura de revocación, que fué comunicada al interesado, requiriéndole para que entregase las llaves de la Empresa que tuviera en su poder; y que el requerido manifestó que con anterioridad había expresado a los socios su deseo de cesar en su puesto de Apoderado, por lo cual entregó copia del poder y las llaves que tenía a doña Pilar González Mediavilla, no volviendo a las oficinas de la Entidad desde el mes de abril, por lo que le extrañaba el requerimiento que se le hacía, y que aunque estimaba nula la revocación, por precisarse según el apartado H de la cláusula VI de la escritura social de 24 de septiembre de 1957 el acuerdo de todos los socios gestores, renunciaba a continuar en sus funciones de Gestor-Apoderado;

Resultando que presentada en el Registro primera copia de la indicada escritura, fué calificada con nota del tenor literal siguiente: «Presentado el precedente documento en este Registro Mercantil a las once horas del día 28 de los corrientes, según el asiendo 28 del diario cuarto, se deniega la inscripción en cuanto a la revocación de poder porque requiriéndose para efectuarla el acuerdo de los dos socios gestores de la Sociedad, según consta de la inscripción séptima de la hoja número tres, que son actualmente doña Pilar González Mediavilla, lo que resulta de la misma inscripción, y don Dámaso García Rodríguez, éste por sí y por sus hermanos doña Petra, doña Carmen, doña Amelia, don Tomás y don Manuel, pero asumiendo por sí solo referido don Dámaso todo el interés social que habría correspondido en «Sobrinos de Gabino Díez, Sociedad Limitada», a su madre, doña Carmen Rodríguez Ramírez, según la inscripción octava, no consta que expresado socio gestor, doña Pilar González Mediavilla, haya prestado su consentimiento para la revocación, practicándose la inscripción en cuanto a la renuncia formulada por don Rufino Sánchez Polo a su cargo de Administrador-Apoderado de «Sobrinos de Gabino Díez, S. L.», en el tomo 19 general de Sociedades, libro segundo de la sección segunda, folio 26 vuelto, hoja número tres, inscripción 11;

Resultando que los hermanos García Rodríguez interpusieron recurso de reforma y subsidiariamente gubernativo contra la anterior calificación y alegaron que según la nota calificadora ni la Ley especial de Sociedades Limitadas ni el Reglamento del Registro Mercantil son aplicables a la Sociedad «Sobrinos de Gabino Díez, S. L.», ni son las disposiciones legales las que informan la vida de esta Empresa, sino el pacto de unanimidad de la cláusula o estipulación VI, sin que, por tanto, exista en las citadas ordenaciones legales ni un solo precepto de carácter imperativo, ya que todos han de quedar subordinados a la voluntad unánime pactada; que en la Ley se impone el gobierno de las Sociedades limitadas por el principio de mayorías y la Jurisprudencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado ha determinado como única excepción a este principio mayoritario el caso de Sociedades constituidas por sólo dos socios; que la Resolución de 20 de julio de 1957, dictada precisamente con referencia a la Sociedad «Sobrinos de Gabino Díez, S. L.», dispuso que en tanto dicha Sociedad siguiera constituida por dos socios, aunque les correspondiera desigualmente el capital social, no podría implantarse pura y simplemente el principio mayoritario de la nueva Ley, principio que necesariamente habría de traducirse para tal supuesto en una solución de unanimidad; que superada después aquella situación de dos únicos socios e integrada actualmente la Sociedad por siete miembros debe regirse por el sistema mayoritario, porque ya, ajustada a la letra y al espíritu de los artículos 14 y 17 de la Ley de Limitadas, puede haber mayorías de socios y de capital; que no puede discutirse ni regatearse a los seis recurrentes la condición de socios de «Sobrinos de Gabino Díez, Sociedad Limitada», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Especial, toda vez que al formalizarse la herencia de su madre, doña Carmen Rodríguez Ramírez, les fueron adjudicadas las participaciones que habían correspondido a la indicada señora, y así constan inscritas en el Registro Mercantil; que para adoptar el acuerdo de la revocación de poder fué convocada, cumpliéndose todos los requisitos legales y estatutarios, Junta de socios, a la que fué citada mediante carta cursada por conducto notarial doña Pilar González Mediavilla, que ni asistió ni envió representante, asistiendo personalmente los demás socios; que en la referida Junta no podía don Dámaso representar a sus hermanos por impedirlo el artículo 16 de la Ley de Limitadas, que dispone que la representación concedida ha de tener carácter especial para cada Junta, sin que se admitan representaciones genéricas por muy amplias e ilimitadas que sean; que los seis socios presentes, que reúnen el 75 por 100 del capital social, pudieron, por tanto, con arreglo en lo prevenido en el artículo 12 de la Ley de Sociedades Limitadas y 122 del Reglamento Mercantil, adoptar válidamente el acuerdo que tomaron; que no obstante estas clarísimas consideraciones, la nota calificadora refleja la opinión de que sobre todo y ante todo domina inape-

lablemente en esta Sociedad la unanimidad, porque a pesar de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley existen dos socios solamente; que al afirmar la nota calificadora que de la inscripción octava del Registro Mercantil aparece que don Dámaso García Rodríguez asume por sí solo todo el interés social que había pertenecido en la Empresa a su madre, doña Carmen Rodríguez Ramírez, incurre en una inexactitud, pues las escrituras que causaron tal inscripción fueron presentadas con un escrito en el que se solicitaba la inscripción de «Designación a favor del que suscribe, don Dámaso García Rodríguez, de representante en la Sociedad «Sobrinos de Gabino Díez, S. L.», con domicilio en esta ciudad, de los derechos que doña Carmen Rodríguez Ramírez tenía en la misma por acuerdo unánime de los herederos de dicha señora»; que la nota del Registro puesta al pie de este documento privado dice claramente (Inscrito el precedente documento...), y la nota puesta al pie de las escrituras de designación del representante dice: «Relacionado el precedente documento...»; que hay una esencial diferencia entre inscribir un documento o relacionar un documento en una inscripción; que el título que provoca directamente la inscripción es aquél y el relacionado sólo lo complementa; que alguna dificultad debió ver el Registrador Mercantil de 1958 para no inscribir las copias de los documentos notariales y si, en cambio, un simple documento privado limitado a pedir la inscripción de una designación de representante, prescindiendo de toda alusión a asumir por sí sólo todo el interés social representado; que aunque la nota calificadora reconoce que la Sociedad tiene en la actualidad siete socios, entiende que cinco de ellos carecen de interés social, ya que el que les corresponde lo asume por sí sólo don Dámaso; que no puede haber socio sin interés social, ya que hay derechos de tal modo inherentes a la condición de socio, que son inseparables del mismo y le dan contenido económico y jurídico; que conforme a los artículos 29, 20 y 16 de la Ley de Sociedades Limitadas el socio tiene al menos el derecho de percibir los beneficios, de disponer de sus participaciones sociales y de votar, todo lo cual desconoce la nota calificadora cuando afirma que doña Carmen, doña Amelia, doña Petra, don Tomás y don Manuel son socios sin interés social, ya que dicho interés lo ha asumido su hermano don Dámaso García Rodríguez; que la cláusula V de la escritura de adaptación implica una esencial contradicción por cuanto «representar» y «asumir» son dos términos incompatibles, de modo que la representación de un interés social excluye radicalmente que el representante pueda asumir ese mismo interés, pues si el representante adquiere asume ese interés de los representados, obra en nombre propio y no en representación, ya que «asumir un interés social» vale tanto como «tomar para sí, adquirir ese interés social»; que una representación no puede llevar a la consecuencia de que los derechos de los representados se transmitan al representante, pues la transmisión de derechos ha de producirse necesariamente por negocios de finalidad traslativa, con título y causa idóneos, como una compraventa, una permuta, una donación, una adjudicación, una cesión, etc., nunca por efecto de una designación de representante; que la expresión final de la cláusula V es sólo una frase disparatada, algo eminentemente absurdo, antes y después de la Ley, y que la inscripción octava, que es una inscripción de representante, y la inscripción novena, que acredita la condición de socios de los señores García Rodríguez, no son incompatibles entre sí y cada una de ellas puede y debe producir los efectos que le son propios, por lo cual don Dámaso está facultado para actuar como representante, siempre que acomode su actuación a los límites legales;

Resultando que el Registrador dictó acuerdo manteniendo su calificación con los siguientes razonamientos: que la nota calificadora se ha limitado a poner de manifiesto los obstáculos que según las inscripciones séptima y octava de la hoja tres, relativas a la Sociedad «Sobrinos de Gabino Díez, S. L.», resultan del Registro e impiden la inscripción de la escritura de revocación de poder, otorgada sin la intervención ni la conformidad del socio gestor doña Pilar González Mediavilla, cuyo curso era necesario con arreglo a lo estipulado en las cláusulas V y VI de la escritura de adaptación de la indicada Sociedad y a la Ley especial de Limitadas, según se deduce de la simple lectura de las expresadas cláusulas; que la repetida escritura de adaptación había sido otorgada el 24 de septiembre de 1957 por doña Pilar González Mediavilla y doña Carmen Rodríguez Ramírez, únicos socios entonces de la indicada Sociedad; que fallecida doña Carmen Rodríguez sus hijos y herederos otorgaron otras escrituras, en las que estipularon que su hermano don Dámaso García Rodríguez «asumirá en la Sociedad la posición que determina el artículo V de la escritura de adaptación de 24 de septiembre...»; que las referidas escrituras fueron inscritas en el Registro Mercantil, donde causaron la inscripción octava de la hoja tres, juntamente con un documento suscrito por don Dámaso, sin que de la lectura del mismo se pueda deducir que su objeto fuera desvirtuar o modificar lo contenido bajo fe notarial, sino más bien facilitar el cumplimiento de lo ordenado en el artículo V y hacer constar que la designación a favor de don Dámaso había sido tomada por unanimidad de los herederos de dichas señora y consiguientemente con el consentimiento y la conformidad del propio don Dámaso, que no habiendo concurrido a las escrituras de adaptación manifestaba así su plena adhesión al contenido de las mismas; que de la nota puesta por el Registrador Mercantil en 1958 al pie del documento suscrito por don Dámaso para la inscripción a su favor de la cualidad de representante de los derechos que su madre, doña Carmen Rodríguez Ramírez, tenía en la Sociedad «Sobrinos de Gabino



Díez, S. L.), resulta con toda evidencia que el documento fué inscrito juntamente con las copias autorizadas de las escrituras de adaptación, por lo que la tesis de los recurrentes de que tales documentos no fueron inscritos, sino simplemente relacionados, hay que rechazarla, y más aún teniendo en cuenta que sería absurdo que los términos de un poder pudieran ser modificados por el representante sin la intervención y conformidad de los representados; que la interpretación que los recurrentes atribuyen a la expresión «asumiendo por sí sólo...» no resulta aceptable ni aun gramaticalmente, pues aparte de que asumir por sí no puede significar lo mismo que «tomar para sí», sino en todo caso «tomar por sí», cuando la acción o efecto de asumir se refiere a un representante que se designa ya se comprende que lo que éste ha de «asumir» no es propiamente toda la sustancia o contenido del interés que se le confiere, sino la representación de todo este interés para que frente a terceras personas lo defienda y promueva con el mismo ardor y cariño que si fuera propio, pero en nombre y para provecho y utilidad de los mandantes; que así entendida la expresión «asumiendo para sí...» de la cláusula V de la escritura de adaptación es obvio que no implica la privación para los socios de derechos tan esenciales como el de percibir su parte de beneficios, disponer de sus participaciones sociales ni siquiera su derecho de votar, que no queda excluido, sino canalizado a través del representante libremente designado y pudiendo en todo caso dicho representante ser removido y sustituido por otro; que sin negar el carácter imperativo de muchos de los preceptos que contiene la Ley de Sociedades Limitadas, la jurisprudencia y la doctrina reconocen que de tales preceptos no se deduce necesariamente el principio de proporcionalidad entre el derecho de voto y la participación en el capital social, permitiéndose que las mismas sean desiguales, siendo ésta una de las varias diferencias que separan la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de la de Anónimas; que la Resolución de 20 de julio de 1957, referente a la Sociedad de «Sobrinos de Gabino Díez, S. L.», invocada por los recurrentes, por ser de fecha anterior al otorgamiento e inscripción de las escrituras y documentos que sirven de base y fundamento a este recurso no ha podido recoger ni decidir directamente las cuestiones planteadas en el mismo, y que, supuesto que cuando existen preceptos de carácter imperativo, como ocurre en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, tales preceptos deben prevalecer sobre los pactos o estipulaciones que los infringen o vulneran, no obstante, estando colocados los pronunciamientos registrales bajo la salvaguardia de los Tribunales, es a éstos, conforme a lo establecido en el artículo primero del Reglamento del Registro Mercantil, y no al Registrador, a quien compete decidir sobre la validez o nulidad de los expresados pronunciamientos, que seguirán produciendo todos sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad.

Vistos los artículos 1, 12, 14, 16 y 21 de la Ley de 17 de julio de 1953 y 1 y 122 del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956;

Considerando que la cuestión planteada viene a reducirse a si en una Sociedad Limitada constituida por sólo dos socios y que por ello—como declaró la Resolución de 20 de julio de 1957—se regía forzosamente por unanimidad, «aunque a tales socios les correspondiera desigualmente el capital social», y en la que al adaptarse a la Ley en 29 de septiembre del mismo año se estableció (cláusula VI) con carácter estatutario la dirección y administración solidaria con la excepción de una serie de actos para los cuales dicha unanimidad («el acuerdo de ambos socios gestores») seguía siendo necesaria, y por otra parte una cláusula V, en virtud de la cual se condicionaba la disolución por fallecimiento de uno de los socios a que los herederos del fallecido, «que tendrían los mismos derechos que su causante», estuvieran «representados en la Sociedad por una sola persona, cualquiera que sea la distribución que entre ellos hagan de su participación en la Sociedad, asumiendo, por tanto, dicho representante todo el interés social del socio fallecido, puede estimarse, por cumplimiento del evento previsto del fallecimiento de uno de los dos socios, que la Sociedad ha superado la situación de dos únicos socios, queda integrada por siete miembros (el socio sobreviviente y los seis herederos del fallecido) y rige para sus acuerdos el régimen mayoritario, conforme al artículo 12 de la Ley y 122 del Reglamento del Registro Mercantil, incluso para un caso en que estatutariamente se requiera el acuerdo unánime («de ambos socios gestores»), como es el de revocación del nombramiento de Administrador-apoderado en favor de un extraño;

Considerando que la pretensión del grupo recurrente—mayoritario en capital, pues posee el 75 por 100 del mismo—altera el equilibrio clara y expresamente establecido de presente y para el futuro, en la escritura de adaptación, y supondría—de aceptarse—una modificación de los Estatutos, en una de cuyas cláusulas se condiciona la no disolución de la Sociedad, a que la representación de los herederos del socio fallecido sea asumida por una sola persona, y en otra, la excepción de una serie de actos a la dirección y administración solidaria, y aunque frente a tales disposiciones estatutarias—por cierto inscritas en el Registro Mercantil—quizá pudiera alegarse el artículo 21, sobre el carácter de socios de los herederos del fallecido, o el 16, que prohíbe las representaciones generales, la aplicación de estos preceptos al caso concreto acarrearía fatalmente—por virtud de la referida cláusula V—la disolución del ente social que de una manera tan precaria se había constituido;

Considerando, por último, que independientemente de la validez o nulidad de tales cláusulas, el hecho es que aparecen inscritas y producirán—conforme al artículo primero del Reglamento de 14 de diciembre de 1956—todos sus efectos mientras no se inscriba la resolución judicial que declare su inexactitud,

Esta Dirección General ha acordado confirmar la nota del Registrador.

Lo que con devolución del expediente original comunico a V. S. para su conocimiento, el del recurrente y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 22 de julio de 1966.—El Director general, Francisco Escrivá de Romani.

Sr. Registrador Mercantil de Cáceres.

## MINISTERIO DE HACIENDA

*ORDEN de 29 de julio de 1966 por la que se conceden a la «Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, S. A.», los beneficios fiscales a que hace referencia la Ley 194/1963, de 28 de diciembre.*

Excmo. e Ilmos. Sres.: En 11 de julio de 1966 se ha firmado el acta de concierto celebrado por el Ministerio de Industria y la Empresa «Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Sociedad Anónima». De conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social, compete al Ministerio de Hacienda la concesión de los beneficios fiscales.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—A los efectos del concierto celebrado con la Empresa «Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, S. A.», y teniendo cuenta los planes financieros y técnicos de la entidad concertada, se concede a ésta los siguientes beneficios de carácter fiscal:

a) Libertad de amortización para las inversiones realizadas durante los primeros cinco años, a partir del mismo ejercicio económico en cuyo balance aparezca reflejado el resultado de la explotación industrial de las nuevas instalaciones o ampliación de las existentes, que se reseñan en el anexo al acta de concierto.

b) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados, que graven las aportaciones, con motivo de las ampliaciones de capital de la sociedad concertada.

c) Reducción del 95 por 100 de los Derechos arancelarios y del Impuesto de compensación de gravámenes interiores, que graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje de primera instalación que correspondan a inversiones previstas en el acta de concierto, siempre que, previo informe del Ministerio de Industria, se acredite que tales bienes no se fabrican en España.

Este beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en España, se importen para su incorporación a los bienes de equipo que se fabriquen en España.

d) Reducción del 95 por 100 de la cuota y recargos de la Licencia fiscal, que la entidad concertada deba satisfacer por las ampliaciones y nuevas instalaciones, durante el periodo de instalación de las mismas.

e) Reducción del 95 por 100 del Impuesto sobre las Rentas de Capital que grave el rendimiento de los empréstitos previstos en el proyecto de la entidad concertada, así como del que recaiga sobre los intereses de los préstamos y operaciones de crédito, siempre que los mismos se convengan por la Empresa con Organismos internacionales o con Bancos e instituciones financieras extranjeras. La aplicación concreta de este beneficio a las operaciones de crédito indicadas se tramitará, en cada caso, a través del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, en la forma establecida en la Orden ministerial de 11 de octubre de 1965. Será preciso, de acuerdo con lo previsto en el Decreto-ley de 19 de octubre de 1961, se acredite el destino de tales recursos a la financiación de las Inversiones Reales nuevas a que se refiere el anexo del acta de concierto, así como el cumplimiento de lo establecido en la Orden ministerial citada.

Los beneficios fiscales anteriormente aludidos que no tengan señalado plazo especial de duración se entiende concedidos por el periodo de cinco años a partir de la fecha de publicación de la presente Orden. Tales beneficios podrán ser prorrogados por la Administración cuando las circunstancias así lo aconsejen por otro periodo no superior a cinco años.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume la entidad concertada en la cláusula segunda del acta dará lugar, de conformidad con lo dispuesto en el párra-